

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

AUTO INTERLOCUTORIO No 27

Proceso	: EJECUTIVO
Ejecutantes	: LUZ MARINA ÁNGEL MUÑOZ, EDISON MENA VALOYES, DAVID ARAQUE ARISTIZÁBAL
Ejecutada	: EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA – GRUPO EMI S.A.S.-
Radicado	: 05001 31 05 015 2023 00038 01
Instancia	: Segunda
Temas y Subtemas	: Ejecutivo Laboral, apelación Auto que niega mandamiento de pago – <i>transacción</i> , proceso ordinario terminado por desistimiento.
Decisión	: Revoca Decisión de Primera Instancia.

En la fecha, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL¹**, procede a resolver sobre **Recurso de Apelación formulado por el apoderado de la parte ejecutante, contra el Auto que se abstuvo de librar Mandamiento de Pago**. A continuación, la Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por la Ponente, que se traduce en la siguiente decisión:

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se solicita librar mandamiento de pago por los siguientes conceptos:

¹ Conformada por las Magistradas LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ como Ponente.

* Dos horas semanales que se deben dedicar a actividades recreativas, culturales, deportivas y de capacitación causadas desde el mes de diciembre de 2013 a la fecha, continuándose su causación hasta el cumplimiento de la obligación en la forma y términos acordados en la conciliación.

* Prevenir a la empresa, bajo apremio de multas sucesivas diarias, para que ponga en funcionamiento programas concernientes a actividades recreativas, culturales, deportivas y de capacitación durante dos horas semanales.

* Perjuicios morales y materiales

* Costas del proceso ejecutivo.

Por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, se actualice en su debida oportunidad, el número de horas adeudadas a los ejecutantes.

Hechos relevantes:

Se afirma que los ejecutantes promovieron demanda ordinaria laboral contra la ejecutada, para que se declarara su obligación de elaborar y poner en funcionamiento los programas concernientes a las actividades recreativas, culturales, deportivas y de capacitación durante dos (2) horas semanales y condenarla a poner en funcionamiento dichos programas a partir de la vigencia de la Ley 50 de 1990; las pretensiones se conciliaron, acordándose que se le reconocería a cada demandante las horas de capacitación desde diciembre de 2013, otorgándosele a la empresa tres años para ponerse al día y 4 meses para implementar los programas respectivos; de esta conciliación se desprenden obligaciones claras, expresas, liquidas y actualmente exigibles sin que a la fecha se hayan cumplido.

Decisión de Primera Instancia:

Mediante Auto del 15 de febrero de 2023, **el Juzgado Quince Laboral del Circuito del Medellín, decidió no librar mandamiento de pago, indicando que el proceso ordinario laboral** instaurado por la señora Luz Marina Ángel Muñoz –y otros- **terminó por desistimiento** de las partes el 13 de febrero de 2019 y no por una conciliación aprobada o realizada por el Despacho; los documentos traídos como título ejecutivo no cumplen las exigencias del artículo 422 del Código General del Proceso; la parte ejecutante no aporta título ejecutivo idóneo, debiéndose denegar el mandamiento de pago solicitado.

Recurso de Apelación:

El apoderado de la parte ejecutante, manifiesta que **dentro del trámite del proceso ordinario laboral las partes llegaron a un acuerdo que fue puesto en conocimiento del Despacho** y como consecuencia del mismo, solicitó el desistimiento de las pretensiones aun cuando en la Providencia que decretó la terminación del proceso no haya hecho mención expresa del convenio; **el Juzgado niega el mandamiento considerando que el proceso terminó por desistimiento, pero se debe tener en cuenta que hubo un acuerdo sobre las pretensiones el cual hace parte del proceso**, no fue extra proceso y el Juez de conocimiento es el que tramita la ejecución.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de Apelación, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, 15 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, respectivamente.

Conflicto jurídico:

El asunto a dirimir, radica en verificar si es procedente revocar el Auto que se abstuvo de librar mandamiento de pago, analizándose si la parte ejecutante aporta título ejecutivo idóneo para librar mandamiento de pago.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente, revocar la decisión de Primera Instancia, por las siguientes razones:

El artículo 422 del Código General del Proceso, determina que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles, que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él o las que emanen de una Sentencia de condena proferida por Juez o Tribunal de cualquier jurisdicción; la referida norma establece lo siguiente:

“...ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por

juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo [184](#)...".

Para que una obligación sea clara, expresa y exigible, se deben cumplir los siguientes requisitos*:

"...Que la obligación sea expresa: esta determinación solamente es posible hacerse por escrito. La obligación tendrá que aparecer delimitada en el documento, pues solo lo que se expresa en tal instrumento es lo que constituye motivo de la obligación, de la ejecución.

Que la obligación sea clara: consiste en que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados, tanto su objeto (crédito) como sus sujetos (acreedor y deudor). Tiene que ver con la evidencia, su comprensión. Jurídicamente hablando, la claridad de la obligación se expresa en la determinación de los elementos que componen el título, es decir, que a los ojos de cualquier persona se desprenda a ciencia cierta que el documento contentivo de la obligación reúne los elementos propios de un título ejecutivo, sin que sea necesario acudir a otros medios distintos de la mera observación.

Que la obligación sea exigible: que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquél o cumplido ésta. Es exigible la obligación cuando puede cobrarse, solicitarse o demandar su cumplimiento del deudor...".

Una vez realizada la notificación del mandamiento ejecutivo, el demandado podrá proponer excepciones de mérito o recurso de reposición, si hay hechos que configuren excepciones previas; conforme a lo previsto en el artículo 442 del Código General del Proceso.

En materia laboral se permite la *transacción*, conforme el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo, en el cual se dispone:

"...ARTICULO 15. VALIDEZ DE LA TRANSACCION. Es válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles..."

* Comentarios contenidos en el artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, editorial Leyer, vigésima tercera edición, páginas 281 y 282 y del Libro "Los Procesos Ejecutivos" de Juan Guillermo Velásquez, Señal Editora, páginas 396 a 397-:

De llegarse a un acuerdo conciliatorio durante el trámite del proceso ordinario laboral, debe observarse las ritualidades prescritas en el artículo 312 del Código General del Proceso, aplicable por la remisión analógica que hace el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, el cual contempla:

“...En cualquier estado del proceso podrán las partes transigir la litis. También podrán transigir las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia.

Para que la transacción produzca efectos procesales deberá solicitarse por quienes la hayan celebrado, dirigida al juez o tribunal que conozca del proceso o de la respectiva actuación posterior a este, según fuere el caso, precisando sus alcances o acompañando el documento que la contenga. Dicha solicitud podrá presentarla también cualquiera de las partes, acompañando el documento de transacción; en este caso se dará traslado del escrito a las otras partes por tres (3) días.

El juez aceptará la transacción que se ajuste al derecho sustancial y declarará terminado el proceso, si se celebró por todas las partes y versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas o sobre las condenas impuestas en la sentencia. Si la transacción solo recae sobre parte del litigio o de la actuación posterior a la sentencia, el proceso o la actuación posterior a este continuará respecto de las personas o los aspectos no comprendidos en aquella, lo cual deberá precisar el juez en el auto que admita la transacción. El auto que resuelva sobre la transacción parcial es apelable en el efecto diferido, y el que resuelva sobre la transacción total lo será en el efecto suspensivo...”

En el asunto bajo estudio, nos encontramos con que:

El apoderado de los ejecutantes manifiesta en la demanda ejecutiva que en el curso del proceso ordinario laboral, “...se conciliaron las pretensiones...”, desprendiéndose “...obligaciones claras, expresas, líquidas y actualmente exigibles de hacer...”; afirmación imprecisa puesto que realmente no se trató de una conciliación (entendiéndose como tal, aquella donde media un tercero); **se trató de una transacción suscrita por los apoderados de ambas partes**, en la cual también se solicitó el

desistimiento del proceso ordinario laboral, veamos sus apartes:

Los suscritos, **ALBERTO LEÓN ZULUAGA RAMÍREZ**, actuando como apoderado de los demandantes y **MARCO ANTONIO GAVIRIA BAENA**, actuando como apoderado de la demandada en el proceso indicado en la referencia, manifestamos a usted que hemos celebrado una **TRANSACCIÓN** por virtud de la cual se resuelven todas las pretensiones de la demanda y consecuentemente manifestamos nuestro **DESISTIMIENTO CONJUNTO** del proceso laboral ya mencionado.

El acuerdo celebrado entre las partes implica que:

- La parte demandada se obliga, conforme con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 50/90, a implementar el programa de actividades recreativas, culturales deportivas o de capacitación para los demandantes, en el término de cuatro (4) meses, cuyo plazo vence el seis (06) de mayo de 2019.
- A partir de la fecha indicada, comenzará con el desarrollo de las actividades destinadas a los demandantes y con el fin de comenzar a desatrasar las horas de capacitación causadas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de radicación de la demanda. Al efecto, se acordó un plazo de tres (3) años para ponerse al día.
- GRUPO EMI S.A.S. pagará a la parte demandante la suma de DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000) por concepto de Agencias en Derecho, que consignará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del presente acuerdo. Venciendo el próximo 20 de febrero de 2019. El depósito se hará en la cuenta de ahorros Bancolombia No. 10140055119 cuyo titular es el doctor Alberto León Zuluaga Ramírez.

Por consiguiente, con base en estas manifestaciones, una vez acordada la transacción sobre todas las pretensiones de la demanda, los apoderados de las partes desistimos conjuntamente del proceso, solicitamos que se decrete la terminación del mismo y ordene su archivo, sin lugar a costas.

Renunciamos a los términos de ejecutoria de la providencia que acceda a lo pedido.

De lo anterior se observa claramente, que si bien las partes manifiestan que desisten del proceso laboral, tomaron tal decisión debido al acuerdo transaccional celebrado, lo cual presta mérito ejecutivo.

El artículo 2469 del Código Civil define la *transacción* como “...un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual...” y que “...No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa...”, encontrándose que **en este caso fue clara la decisión de las partes de terminar el litigio, pero no con fundamento en una simple renuncia de derechos equiparable a un desistimiento de las pretensiones, sino porque se determinaron unos compromisos concretos a cargo de la empresa demandada**, en los que, dicho sea de paso, no se

observa lesión de los derechos de los trabajadores o desconocimiento de derechos ciertos e indiscutibles.

Al margen de que la *a quo* no dio curso al trámite contemplado en el artículo 312 del Código General del Proceso, sino que declaró la terminación por desistimiento y que contra dicha decisión no se interpusieron recursos ni se efectuó manifestación alguna, lo cierto es que **las partes celebraron una transacción, en la cual se establecieron unas obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de la demandada.**

Al respecto, la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, por ejemplo, en Providencia SL127 de 2022 Radicado 84220, señaló que **no tener en cuenta el acuerdo transaccional como documento constitutivo de título ejecutivo, significa desconocer su validez y existencia, dejando a los demandantes desprovistos del mecanismo idóneo para obtener el cumplimiento de las obligaciones claras y expresas a las cuales se comprometió la demandada.**

Así las cosas, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente, **revocar** el Auto que por vía de Apelación se revisa, para en su lugar, **ordenar al Juzgado de origen estudiar la procedencia de la admisión de la demanda ejecutiva, debiendo tener en cuenta como título ejecutivo, la transacción celebrada entre las partes.**

COSTAS:

No se condena en Costas en esta Segunda Instancia, al haber prosperado el recurso de Apelación formulado; conforme a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso y

el Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **REVOCA** la Providencia de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de Apelación se revisa; en su lugar, se **ORDENA** al **JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**, estudiar la procedencia de la admisión de la demanda ejecutiva, **debiendo tener en cuenta como título ejecutivo, la transacción celebrada entre las partes**; de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Providencia.

SEGUNDO: **No se condena en Costas** en esta Segunda Instancia, según lo indicado en la parte motiva.

TERCERO: Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** y se ordena devolver el proceso al Despacho de origen.

En constancia se firma por quienes intervinieron,

Las Magistradas,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
Estados No **71 del 28 de abril de 2023**

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>